

Santiago, quince de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos RIT O-4.562-2019 RUC 1940200360-2, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de veintisiete de abril de dos mil veinte, se dio lugar a la demanda declarativa de relación laboral, despido injustificado y nulo, y cobro de prestaciones adeudadas, deducida por doña María Angélica Ogaz Muñoz en contra de la Municipalidad de La Reina.

La demandada presentó recurso de nulidad, que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

En contra de este fallo, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos ejecutoriados que se invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que la materia de derecho propuesta consiste en determinar “*la correcta aplicación de los artículos 1° y 4° de la Ley 18.833, en relación con los artículos 3°, letra b), 7° y 8° del Código del Trabajo*”.

Para la recurrente, es errada la conclusión que se contiene en la sentencia impugnada, que decidió aplicar las normas del Código del Trabajo a una relación de carácter estatutaria, correcta declaración que se contiene en las que ofrece para confrontar la recurrida, que describen las cláusulas pactadas en los contratos a honorarios suscritos entre las partes, que considera de contenido similar a las acordadas en este caso; razones por las que solicita su invalidación y se dicte la de reemplazo que indica.

Tercero: Que, para efectuar el ejercicio de comparación propio del recurso de unificación, se debe constatar la similitud de la materia de derecho resuelta en la sentencia impugnada y en las que se ofrecen para confrontarla, semejanza que es, asimismo, necesaria cuando se contrastan las circunstancias de contexto que



motivan la decisión reprobada con las particularidades pertenecientes a la orientación jurisprudencial divergente.

En tal sentido, para su procedencia, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se sostengan concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una discrepancia que se deba unificar.

Por lo anterior, para que prospere este arbitrio, y como cuestión previa, es menester verificar si los hechos establecidos en el pronunciamiento impugnado son susceptibles de ser cotejados con aquellos que sirven de fundamento a los que se invocan para su contraste, puesto que sólo sobre la base de dicha identidad o semejanza, será posible asimilar decisiones contradictorias.

Cuarto: Que, por lo expuesto, es necesario consignar, en forma previa, los hechos establecidos en la instancia:

1.- La demandante, doña María Angélica Ogaz Muñoz, suscribió sucesivos contratos a honorarios con la Municipalidad de La Reina, manteniéndose vinculada con la demandada, sin solución de continuidad, desde el 1 de marzo de 2017 al 16 de abril de 2019, prestando servicios administrativos de diversa naturaleza en forma subordinada y dependiente, de ejecución regular y rutinaria, realizando turnos y prestando apoyo a vecinos en ferias de la comuna, atención telefónica y presencial en dependencias del municipio; actuando como recepcionista en la alcaldía; participando en la tramitación de solicitudes y levantamiento de información de las organizaciones comunitarias; confeccionando la agenda semanal de actividades; llevando el control de los talleres comunitarios, y entregando cheques e información sobre actividades de capacitación y beneficios sociales a juntas de vecinos, entre otras.

2.- La demandante cumplió estas funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de La Reina, para lo cual contaba con credencial, relacionándose con la demandada a través del Jefe de Relaciones Públicas y del gabinete o del Director de Aseo y Ornato. Cumplía jornada de lunes a viernes, ingresando a las 8:30 de la mañana, sin perjuicio de su obligación de asistir durante algunos fines de semana, percibiendo como contraprestación mensual, la suma de \$500.000. Señala que tenía derecho a vacaciones pagadas.

Quinto: Que, sobre la base de los hechos establecidos, la judicatura de la instancia resolvió que las labores ejecutadas por doña María Angélica Ogaz



Muñoz, corresponden a actividades propias y permanentes de la demandada, que exceden, por tanto, el contenido permitido en el artículo 4 de la Ley N°18.883, por tratarse de funciones habituales y genéricas, ejecutadas en forma subordinada y dependiente, y adscritas a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de La Reina, concluyendo, por supletoriedad, que la normativa aplicable es la del Código del Trabajo, incluidos los efectos patrimoniales causados por la desvinculación indebida, puesto que la relación finalizó sin expresión de fundamento legal, interpretación que, por último, consideró coherente con la finalidad protectora de sus disposiciones.

La Corte de Apelaciones, conociendo el recurso de nulidad deducido por la demandada, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a lo dispuesto en sus artículos 3 letra b), 7 y 8, y a los artículos 1 y 4 de la Ley N°18.883, consideró que *“los hechos asentados son inamovibles, debiendo circunscribirse la controversia solo a la parte jurídica, lo que no ha ocurrido en la especie, por cuanto, el fallo que se revisa, ha establecido la existencia de un vínculo que excede los términos del artículo 4° de la Ley 18.883, pues se acreditó la existencia de un vínculo de subordinación propio y específico de relación laboral. Por tanto las normas denunciadas del Código del Trabajo, han sido correctamente aplicadas; y por el contrario, aquellas de la ley 18.883, no han sido vulneradas, por cuanto resultaban inaplicables al caso de autos”*.

Sexto: Que, a fin de acreditar la existencia de distintas interpretaciones respecto de la materia de derecho propuesta, la recurrente presentó dos sentencias pronunciadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos Rol N°1.603-2017 y 2.175-2017, de 5 de diciembre de 2017 y 22 de marzo de 2018, respectivamente.

En la primera sentencia de contraste, se establecieron los siguientes hechos: *“a) que en virtud de diversos contratos a honorarios el demandante prestó servicios para la Municipalidad demandada desde el 20 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2016; b) El demandante desempeñó sus funciones como gestor de eventos en el departamento de ‘Gestión Territorial’ de la municipalidad demandada; y c) Para respaldar el pago de sus servicios el actor emitió las correspondientes boletas de honorarios”*; en la segunda sentencia, en tanto, se consideraron los siguientes hechos acreditados en la instancia: *“a) que en virtud de diversos contratos a honorarios el demandante prestó servicios para la Municipalidad demandada desde el 15 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de*



2016; b) El actor desempeñó sus funciones como ‘Coordinador Territorial’ y ‘Gestor Territorial’ en el departamento de ‘Gestión Territorial’ de la municipalidad demandada; c) El cometido ejecutado por el demandante estaba asociado a los programas sociales ‘Capacitación Comunitaria’ y ‘Desarrollo Comunitario’; y d) Para respaldar el pago de sus servicios el actor emitió las correspondientes boletas de honorarios”.

Sobre la base de tales hechos y con similares argumentos, en ambas sentencias se consideró para resolver, que “la ley no ha precisado lo que debe entenderse por ‘accidental’ ni ‘específico’, motivo por el que cabe asumir esas palabras de acuerdo a su uso general o frecuente. Entre las acepciones de ‘accidental’ está la siguiente: ‘3. Dícese del cargo que se desempeña con carácter provisional o interino...’. A su vez, provisional es ‘aquello que se hace, se halla o se tiene temporalmente’. En suma, denota la idea de algo transitorio y excepcional, impresión que se ve reafirmada por la propia norma legal cuando supedita ese tipo de contratación al hecho que no puede tratarse de labores habituales de la institución. Por su parte, ‘específico’ designa ‘lo concreto, lo preciso, lo determinado’. De acuerdo con lo asentado en autos, la contratación del demandante se llevó a cabo para que prestara sus servicios como ‘gestor de eventos’, ‘coordinador territorial’ y ‘gestor territorial’ en la Municipalidad de La Reina. Consecuentemente, los servicios contratados son susceptibles de encuadrar en la forma del ‘cometido específico’, o sea, en la hipótesis que prevé el inciso segundo del citado artículo 4°, como quiera que tuvieron por objeto el desarrollo de una labor precisa y determinada, que no está necesaria ni directamente asociada a una actividad regular o permanente de la corporación demandada, de momento que –a su vez-, estaban asociadas a programas sociales determinados y concretos (‘Capacitación Comunitaria’ y ‘Desarrollo Comunitario’). No es obstáculo para ello que la función o la labor se adscriban a un departamento determinado de la municipalidad porque es obvio y evidente que el cometido debe ejecutarse con relación al órgano que contrata, pero ello no significa que la persona se inserte en la estructura organizacional, al punto de integrarse a ella”.

Séptimo: Que, según lo expuesto, se advierte que estos pronunciamientos contienen, *prima facie*, una interpretación divergente de las disposiciones que rigen la contratación de funcionarios municipales a honorarios, puesto que desestimaron la aplicación de las normas contenidas en el Código del Trabajo,



constatándose, por tanto, que existen distintas interpretaciones sobre una misma materia de derecho, por lo que se debe decidir cuál es la correcta.

Octavo: Que el artículo 4 de la Ley N°18.883, establece la posibilidad de contratación a honorarios como un mecanismo de prestación de servicios, a través del cual, las municipalidades pueden contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, y cuando necesitan llevar a cabo labores propias, siempre que sean ocasionales, específicas, puntuales y no habituales, por lo que corresponden a una modalidad de prestación de servicios particulares que no confiere a quien los desarrolla la calidad de funcionario público, asistiéndole sólo los derechos que establece el respectivo contrato.

Sin embargo, si las funciones realizadas exceden o no coinciden con esa normativa, revelando características propias de un vínculo laboral sujeto al Código del Trabajo, será éste el que rija, por no enmarcarse tales actividades en la hipótesis estricta que contempla el artículo antes citado, por cuanto la vigencia del mencionado Código constituye la regla general, y porque, además, tratándose de un órgano de la Administración del Estado, éste debe someter sus actuaciones al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, sin que pueda, en consecuencia, rebasar el contenido del artículo 4 de la Ley N°18.883.

Noveno: Que tal calificación no implica desconocer la facultad de cada municipio para contratar bajo régimen de honorarios, siempre que sea manifestación de un mecanismo de prestación de servicios que, no obstante pertenecer al órgano, sean ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintos de las que realiza el personal de planta o a contrata, y que efectivamente constituyan cometidos específicos, es decir, labores puntuales y determinadas en el tiempo, perfectamente precisadas.

Décimo: Que, de acuerdo con los hechos establecidos en la instancia, se advierte que las funciones cumplidas en la práctica por la demandante, fueron genéricas, regulares, rutinarias y propias del ámbito administrativo municipal, ejecutadas en forma subordinada en dependencias de la demandada, principalmente referidas a la atención directa de vecinos y organizaciones sociales, quien, además, participaba en ferias de la comuna, sujeta a la supervisión de los Jefes de Relaciones Públicas y de Gabinete, y de los Directores de Aseo y Ornato, y de Desarrollo Comunitario, esta última responsable de su contratación. De lo anterior, se advierte que aquéllas actividades responden a las



funciones en las que la demandada tiene injerencia, por cuanto sirven al interés de la comunidad, según lo dispuesto en el artículo 3 letra c) de la Ley N°18.695, por lo que no puede sostenerse que ejecutó actividades específicas, permitidas por el régimen excepcional del artículo 4 de la Ley N°18.883, sino más bien, y tal como se resolvió, una relación normada por las disposiciones del Código del Trabajo, por haberse rebasado el ámbito extraordinario de la regulación estatutaria, amparándose, por supletoriedad, en sus artículos 1, 7 y 8.

Tal cuestión es diversa de las mencionadas en las sentencias de contraste, en que fue determinante para decidir la no habitualidad y especificidad de la función contratada, apartándose, en consecuencia, de los hechos comprobados en estos autos.

Undécimo: Que, en efecto, para determinar qué estatuto se aplica a una persona que presta servicios para un órgano de la Administración del Estado, no corresponde considerar únicamente la formalidad de las cláusulas contractuales que rigen la relación existente entre las partes, sino que será determinante lo que suceda en la práctica, según los hechos establecidos en cada caso, particularidades concurrentes en el que se revisa, de las que fluyen elementos que permiten su adscripción a las normas del Código del Trabajo, según el criterio interpretativo que la doctrina denomina “primacía de la realidad” y que en la legislación laboral encuentra respaldo normativo en el inciso primero de su artículo 8, puesto que toda prestación de servicios en los términos señalados en su artículo 7°, esto es, de carácter personal, contra el pago de una remuneración periódica, y bajo subordinación y dependencia, que hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, cuya principal expresión se da cuando se contrata a un dependiente con la apariencia de una función a honorarios, cumpliendo tareas propias del servicio que lo emplea, divergencia que obliga a establecer la verdadera naturaleza del vínculo.

En ese contexto, si una persona se incorpora a la dotación de un servicio estatal bajo la modalidad que contemplan los artículos 11 de la Ley N°18.834 o 4 de la Ley N°18.883, pero, en la práctica, ejecuta una labor que carece de la característica de especificidad o que se desarrolla fuera de las condiciones de temporalidad que exigen estas disposiciones, satisfaciendo una exigencia que la ley reclama del órgano público, corresponde aplicar las normas del Código del Trabajo, por cuanto, como se indicó, constituye la regla general en esta clase de relaciones y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría



admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el dependiente quedaría al margen del estatuto que fue invocado al inicio de la vinculación, en una situación de precariedad injustificada.

Duodécimo: Que, en consecuencia, si bien se constata la disconformidad denunciada en la interpretación y aplicación dada a los preceptos analizados en la sentencia recurrida, ella no constituye la hipótesis prevista por el legislador para que esta Corte, por la vía del presente recurso, invalide el fallo de nulidad y altere lo decidido en el fondo, por cuanto la línea de razonamiento de la judicatura recurrida para fundamentar su decisión se ajusta a derecho, por lo que el arbitrio intentado, será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

N°26.987-2021.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y los abogados integrantes señores Eduardo Morales R., y Gonzalo Ruz L. No firma la Ministra señora Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, quince de julio de dos mil veintidós.



En Santiago, a quince de julio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

